

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó en revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 30 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

## AMPARO

*De garantías promovido ante el juzgado de Distrito de Hidalgo por varios vecinos de la ranchería de las Animas, contra el jefe político del Distrito de Pachuca que dió orden para que se destruyesen las casas de dicha ranchería, obligando á los quejosos á que se reduzcan al pueblo de Epazoyuca.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que en vista de haber dictado el C. jefe político de este Distrito al juez auxiliar de las Animas el 21 de Febrero, orden para que destruyese las moradas de aquella ranchería, como consta de los documentos que corren agregados á fojas 1 y 2 de los autos, los CC. Benito, Vicente, José y José María Castellan, Jesus Solis y José Santillan han ocurrido á este juzgado, pidiendo se les ampare

COMO IV.—PARTE II.

y proteja contra la determinacion de la autoridad que los molesta en su persona, familia, domicilio y posesiones y los ocupe sus propiedades sin los requisitos legales. El C. jefe político informa sobre las causas que motivaron su determinacion, y expone: que por hallarse diseminadas las chesas de los solicitantes y ser verdaderas madrigueras de los bandidos, donde se les proporcionan noticias que frustran la persecucion de las autoridades, se resolvió en vista de la fraccion 15 del artículo 18 de la ley de 21 de Abril de 1868, que hablando de las atribuciones de los jefes políticos dice: "Procurar con empeño que se reduzcan á vivir en poblado los habitantes dispersos en los campos, para que se formen poblaciones regularizadas," con las demas razones expuestas en la solicitud que hicieron los vecinos de la municipalidad de Epazoyuca, constante á fojas 9 y 10 del expediente, á dictar la providencia de que se quejan los solicitantes. Queda demostrado por lo expuesto, no solamente que la autoridad determinó por escrito, sino que ademas de haber fundado la causa de su procedimiento, en ley expresa, con la mencionada determinacion no se ocupa la propiedad, sino antes bien se asegura y respeta bajo la salvaguardia de la autoridad. En vista de las razones aducidas y con fundamento del artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, el promotor pide al Juzgado de Distrito se sirva declarar: que la Justicia federal no ampara ni protege á los CC. Benito, Vicente, José y José María Castellan, Jesus Solis y José Santillan.

Pachuca, Marzo 19 de 1873. Firmado. *M. Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Abril 19 de 1873.—*F. Briseño.*

## OTRO PEDIMENTO DEL PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal no encuentra en las constancias que tiene á la vista una sola que justifique las órdenes que se comunicaron al auxiliar de la ranchería de las Animas, para que proceda á la extinción de esta. Por tal motivo y fundado en el artículo 69 de la ley de 20 de Enero de 1869, concluye pidiendo al Juzgado de Distrito, se sirva ordenar la suspensión hasta tanto se sustancié este recurso. Pachuca, Marzo 5 de 1873. Firmado.—*M. Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Abril 19 de 1873.—*F. Briseño,*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Pachuca, Marzo 25 de 1873. Visto este juicio promovido por Benito, Vicente, José María y José Castelan, Jesus Solis y José Santillan, vecinos de la ranchería de las Animas, contra el C. jefe político de este Distrito por violación de las garantías de los artículos 16 y 27 de la Constitución general, mandando destruir todas las casas de la expresada ranchería y obligando á los vecinos á que se reduzcan al pueblo de Epazoyuca. Visto el informe de la autoridad responsable; el pedimento fiscal y demás necesario y considerando, primero: que la providencia reclamada es notoriamente arbitraria, porque á nadie puede privarse del derecho de vivir donde mejor le acomode, ni nadie está facultado para destruir las habitaciones de los particulares á pretexto de parecer estas al C. jefe político, mas bien *actuares de salvajes ó madrigueras de bandidos*, porque lo primero solo significa ó una pobreza y miseria de lo que en gran parte son responsables los gobiernos, ó que estos hostilizan tanto á los ciudadanos que los obligan á huir de ellos ocultándose en los bosques ó remontándose en las montañas; y segundo, solo puede autorizar al C. jefe

político para poner á los habitantes de la expresada ranchería á disposición de sus jueces competentes para que se les juzgue y castigue como cómplices, receptadores ó encubridores de malhechores, mas no para imponerles de plano la pena de destruir sus casas y de abandonar sus posesiones, porque esta es una flagrante violación de los artículos 16, 21 y 27 del Código fundamental; tercero, que aunque el expresado C. jefe político pretende apoyarse en un decreto del Estado en que se le previene *procurar con empeño* que se reduzcan á vivir en poblado los habitantes dispersos en los campos para que se formen poblaciones regularizadas, este decreto debe entenderse en los términos que no ataque la libertad individual ni la propiedad, porque el objeto de los gobiernos y de las instituciones no consiste en formar bonitas poblaciones aunque sean hacinamientos de párias, sino en respetar y proteger los derechos del hombre, (artículo 19 del Código de Procedimientos de la República). Por tales consideraciones y con fundamento de los artículos 101 y 102 del expresado Código, se decreta: que la Justicia de la Union ampara y protege á los vecinos de la ranchería de las Animas que han promovido este recurso, contra la providencia del C. jefe político de este Distrito en virtud de la que se les obliga á destruir sus habitaciones, á abandonar sus propiedades y á reducirse al pueblo de Epazoyuca, por atacar semejante disposición las garantías que el propio Código otorga en sus artículos 16, 21 y 27. Ilágase saber; exíjase la reposición del papel sellado; publíquese; saquénsese las copias respectivas para el Semanario y remítanse estos autos á la Corte Suprema de Justicia para la revisión de esta sentencia que pronunció y firmó el C. Lic. Miguel Mejía, Juez de Distrito de Hidalgo. Doy fé.—*M. Mejía.*  
—*F. Briseño.*

Es copia que certifico. Pachuca, Abril 19 de 1873.—*F. Briseño.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Abril 24 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por Benito, Vicente, José y Jose María Castolan, Jesus Solis y José Santillan, vecinos de la rancharía de las Animas del municipio de Epazoyuca del Distrito de Pachuca, contra el C. J. M. Inclán gefe político del mismo Distrito, por su orden relativa á que se destruyan todas las casas de la expresada rancharía y obligando á los vecinos á que se reduzcan al pueblo de Epazoyuca, y considerando: que á nadie puede privarse de la facultad que tiene de habitar donde mas le acomode; que ninguna autoridad tiene la de destruir las habitaciones de los vecinos de una poblacion, y que ordenar lo contrario un gefe político, es vulnerar la garantía á que se refieren los artículos 16, 21 y 27 de la Constitucion federal; de conformidad con lo que previene en su artículo 101, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 25 del mes próximo pasado por el Juez de Distrito de Hidalgo, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los vecinos de la rancharía de las Animas que han promovido este recurso, contra la providencia del gefe político del Distrito mencionado, en virtud de la que se les obligó á destruir sus habitaciones, á abandonar sus propiedades y á reducirse al pueblo de Epazoyuca, por atacar semejante disposicion las garantías que el propio Código otorga en sus artículos 16, 21 y 27. Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca. Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de*

*la Garza.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*L. M<sup>a</sup> Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 16 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tamaulipas por Benito Castillo en nombre de su hermano Jesus, contra la consignacion de este al servicio de las armas.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El fiscal dice: que del informe pedido por V. al C. comandante militar de esta plaza resulta, que este funcionario exitado por D. Carlos Osorio, Presidente accidental del ayuntamiento de Magiscatzin, aprehendió y consignó al servicio militar á Jesus Castillo que ha pedido amparo.

Del informe pedido á Magiscatzin aparece, que dicho Osorio murió; que tuvo desavenencias personales con Castillo, y por las que se cree que ofició al C. comandante militar para que lo aprehendiese, y que el mismo Castillo no es vago ni ladrón sino hombre trabajador y pacífico.

De cualquiera manera, el hecho es que aun suponiendo culpable á dicho Castillo de algun delito, no es el servicio de las armas lo que debe aplicarsele como pena, ni la aplicacion de esta corresponde á la autoridad municipal sino á la judicial.

Ademas, el quejoso manifiesta estar por fuerza en el servicio militar, de modo que los artículos 49, 59 y 21 de la Constitucion General aparecen conculcados y violadas las garantías que en ellos se reconocen á todo ciudadano.